

**INE/CG1151/2021**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS, ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE POSTULADO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

**VISTO** para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

### **ANTECEDENTES**

**I. Escrito de queja.** El quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/190/2021 signado por el C.P. Juan Gilberto Barragán Borghes, Encargado del Despacho de Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite oficio número DJ/CEE/1065/2021, signado por el Lic. Jhonatan Emmanuel Sánchez Garza, Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, por medio del cual remite un escrito de queja presentado por el C. Daniel Galindo Cruz en su carácter de Representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Miguel Bernardo Treviño Hoyos, entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de recursos, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Nuevo León. (Fojas 01 – 26 del expediente)

**II. Hechos denunciados y elementos probatorios.** De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito presentado.

“(…)

(…) acudo a denunciar al **C. MIGUEL BERNARDO TREVIÑO HOYOS** en su carácter de **CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN**, debido a que obtuvo apoyo de una persona moral.

Lo anterior con fundamento en los artículos 70 y 71 de la Ley Electoral para el ESTADO DE Nuevo León y 94 inciso f) fracción vi) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efectos de que la Comisión Estatal Electoral tenga a bien iniciar, a partir de la presente denuncia, el **PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR** conducente, en contra de **MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS**, candidato independiente a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

(…)

### **HECHOS**

- A.** Que es un hecho público y notorio que el pasado 6-seis de octubre de 2020-dos mil veinte inició el Proceso Electoral local 2020-2021.
- B.** Que las campañas electorales iniciaron el 05-cinco de marzo del presente año.
- C.** Que en fecha 05 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria le fue aprobada por la Comisión Estatal Electoral la procedencia de candidatura Independiente para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León a favor del C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos.

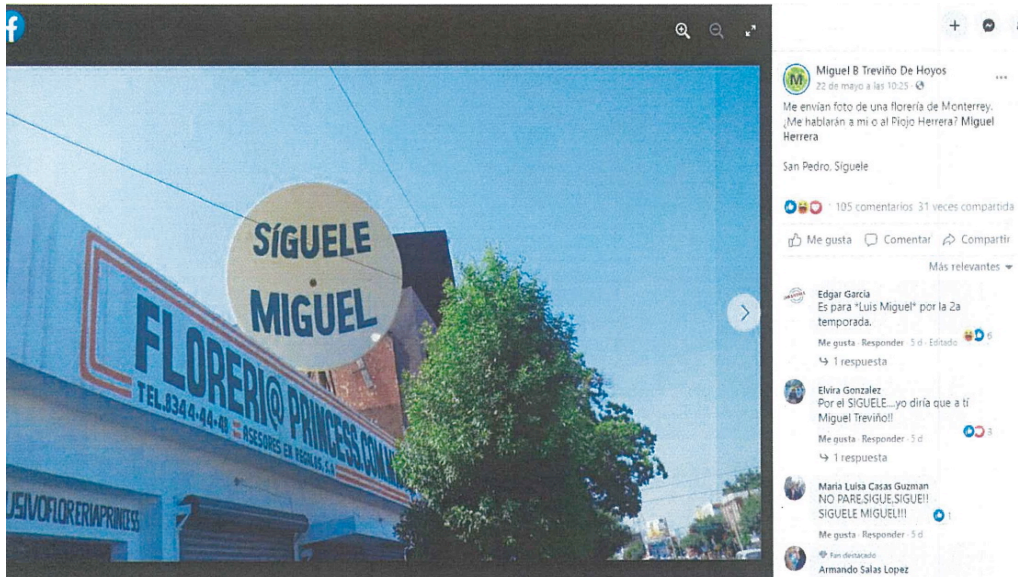
Ahora bien, no obstante que el denunciado obtuvo la aprobación de la candidatura independiente el día 05 marzo del presente año, específicamente en el Municipio de San Pedro Garza García, esa autoridad debe de observar con gran claridad la infracción a la Ley cometido por el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, en su calidad de candidato independiente como Presidente

*Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León dentro del actual Proceso Electoral, al recibir apoyo de personas morales y además compartirlo a través de la red social denominada Facebook, lo anterior como se acreditara dentro de la presente denuncia.*

*Página de Facebook del candidato:*

<https://www.facebook.com/miguelbtrevino>

*En fecha 22 de mayo del presente año, el denunciado realizó una publicación en la red social denominada Facebook, donde difundió una imagen, donde se aprecia un negocio llamado: FLORERIA PRINCESS, la cual se ubica sobre la Avenida Cuauhtémoc, entre 5 de mayo y Washington, en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En dicha imagen se puede observar la presencia de una “parabólica” la cual es propiedad de dicha persona moral y actualmente a la fecha difunde el mensaje “SÍGUELE, MIGUEL” la frase es utilizada para la campaña del denunciado. Además, el público de los comentarios de dicha publicación hace referencia a que se refiere al denunciado dicho anuncio, por lo que sí genera un alto impacto frente al electorado.*



*Liga de publicación:*

<https://www.facebook.com/miguelbtrevino/photos/a.425846797751194/1444987099170487/>

*Es importante mencionar que dicha avenida Cuauhtémoc, es transitada por miles de vehículos diarios por lo que dicho anuncio genera un alto impacto al electorado.*

*Ciudadanos transitaron por el lugar denunciado, y se percataron la presencia de dicho anuncio que favorece al denunciado Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, tal como se advierte a continuación:*



*Es importante establecer que el denunciado está obteniendo un apoyo de una persona moral, por lo cual se está violentando el artículo 94, inciso f), fracción vi) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a continuación se menciona:*

Artículo 394. 1. Son obligaciones de las Candidatas y los Candidatos independientes registrados:

f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

vi) las personas morales, y

*Esta autoridad debe investigar a la misma, así como al denunciado y aplicarle la sanción correspondiente.*

### **SOLICITUD DE FE DE HECHOS**

Con fundamento en el artículo 97 Fracción XVI de la Ley Electoral del Estado, se **solicita se levante fe de hechos respecto a la publicidad efectuada en la página oficial de Facebook, así como del anuncio ubicado sobre avenida Cuauhtémoc entre 5 de mayo y Washington en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que es señalada en la presente a fin de acreditar la existencia de la misma, y ante el temor que la misma pueden ser eliminada de dicha red social y de dicha ubicación.**

### **MEDIDAS CAUTELARES**

En cumplimiento del inciso f) del artículo 371 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, ocurro a solicitar las siguientes medidas cautelares:

Como medida cautelar, se solicita se ordene de inmediato al C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Florería Princess, **eliminar la publicación, así como anuncio denunciado y abstenerse utilizar apoyos de personas morales,** por lo que de continuar publicándose con el electorado la violación es mayor y gravemente violentado el principio de equidad en la contienda.

(...)

### **PRUEBAS**

- 1. DOCUMENTAL PÚBLICA.** Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral, que acredita a C. Daniel Galindo Cruz como Representante ante ese órgano.
- 2. DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en Fe de Hechos.
- 3. TÉCNICA.** Consistente en imágenes tomadas de la página de Facebook del Candidato.
- 4. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS.** Consistente en todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en todo lo que favorezcan a los intereses del partido político denunciante.
- 5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Consistente en todo lo actuado dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en cuanto favorezca a comprobar la conducta imputada a los denunciados.

(...)"

**Elementos probatorios aportados que obran en el expediente:**

- Fe de hechos realizada por el Licenciado Erick Eugenio Leal Guevara, analista de la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León respecto de la existencia de la antena parabólica con el texto “SIGUELE MIGUEL”.
- Imágenes tomadas de la página de Facebook del C. Miguel Bernardo Treviño De Hoyos donde menciona en la publicación: *“Me envían foto de una florería de Monterrey, ¿Me hablan a mi o al Piojo Herrera?”*

**III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.** El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, asimismo, notificar y emplazar a los sujetos incoados. (Fojas 27 y 28 del expediente)

**IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de queja.**

a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 31 y 32 del expediente)

b) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto Nacional Electoral los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Fojas 33 y 34 del expediente)

**V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29915/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 35 y 36 del expediente)

**VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja a la Consejera y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.** El

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29916/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 37 y 38 del expediente)

**VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional**

a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29918/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio INE/UTF/DRN/SNE/1595/2021 el inicio del procedimiento de mérito al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional. (Fojas 39 - 45 del expediente)

**VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. Miguel Bernardo Treviño Hoyos, entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.**

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29917/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio INE/UTF/DRN/SNE/1592/2021 el inicio del procedimiento de mérito al Representante de Finanzas del Partido Morena. (Fojas 46 - 55 del expediente)

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Miguel Bernardo Treviño Hoyos, entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León no dio respuesta al emplazamiento.

**IX. Solicitud de certificación a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.**

a) Con fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/1036/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Lic. Daniela Casar García encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara la existencia y contenido de dos links de la página de la red social denominada Facebook. (Fojas 58 - 60 del expediente)

b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/DS/1551/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/286/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de la información relacionada con la existencia y contenido de dos páginas de internet, por lo que el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/311/2021. (Fojas 68 - 80 del expediente)

**X. Solicitud de información a la Florería Princess, Asesores en regalos S.A.**

a) Con fecha dieciocho de junio del dos mil veintiuno, esta Unidad Técnica de Fiscalización emitió un acuerdo de colaboración a efecto de solicitar el auxilio de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral para notificar y requerir al representante y/o Apoderado Legal de la Florería Princess, asesores en regalos S.A., a efecto de que proporcionara la información solicitada referente a una antena parabólica instalada en el domicilio de dicho negocio con la frase “Síguele Miguel”. (Fojas 61 - 63 del expediente)

b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0704/2021 la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León notificó el requerimiento de información a la Florería Princess Asesores en regalos S.A. a efecto de que en el término de cinco días diera contestación a los cuestionamientos hechos por esta autoridad. (Fojas 81 - 93 del expediente)

c) El seis de julio de dos mil veintiuno, el Representante Legal de la persona moral “Asesores en Regalos, S.A.” dio contestación a la solicitud de información, por lo que a continuación se transcribe la parte conducente:

“(…)”

*Respuesta: La frase no corresponde a un mensaje en beneficio de la campaña del C. Miguel Bernardo Treviño Hoyos.*

“(…)”

(Fojas 94 - 141 del expediente)

**XI. Razones y constancias.**

a) El dieciocho de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia para los efectos legales conducentes, de la red social denominada “Facebook” del entonces candidato independiente al cargo de



Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el C. Miguel Bernardo Treviño Hoyos, por lo que, al ingresar al contenido de la misma, se despliega una página en la cual se observa la frase “*Este contenido no está disponible en este momento*”. (Fojas 56 y 57 del expediente)

b) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia para los efectos legales conducentes, de la contabilidad del sujeto denunciado dentro del portal del Sistema Integral de Fiscalización, advirtiéndose los reportes contables registrados por parte del C. Miguel Bernardo Treviño De Hoyos, entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; por lo que se seleccionó el apartado de “*Reportes de Diario y Mayor*”. (Fojas 64 - 67 del expediente)

## **XII. Acuerdo de Alegatos**

a) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera. (Fojas 142 y 143 del expediente)

b) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33186/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2776/2021 la apertura de la etapa de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, a efecto de que en el término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 144 - 150 del expediente)

c) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33185/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2778/2021 la apertura de la etapa de alegatos a efecto de que en el término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 151 - 156 del expediente)

d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, ninguno de los interesados, presentó respuesta a los alegatos de mérito.

**XIII. Cierre de Instrucción.** El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y

ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 319 del expediente).

**XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su décima sesión extraordinaria urgente, celebrada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 25, 27, 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

### **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente

para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

**2. Estudio de Fondo.** Que, al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, omitió rechazar una aportación en especie por parte de ente prohibido, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 por concepto de una antena parabólica.

En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos incoados incumplieron con lo dispuesto en los artículos artículos 394, numeral 1, incisos f), sub-inciso vi), en relación con los artículos 401, numeral 1, inciso i), 431, numeral 1 y 446, numeral 1, inciso c) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96, numeral 1, 121, numeral 1, inciso i) y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

#### **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**

##### **Artículo 394.**

*1. Son obligaciones de las Candidatas y los Candidatos Independientes registrados:*

*(...)*

*f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:*

*(...)*

*vi) Las personas morales, y*

*(...)*

##### **Artículo 401.**

*1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia:*

*(...)*

*i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.*

*(...)*

**Artículo 431.**

*1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.*

*(...)*

**Artículo 446.**

*1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:*

*(...)*

*c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;*

**Reglamento de Fiscalización**

**“Artículo 96.**

**Control de ingresos**

*1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.*

*(...)*

**Artículo 121.**

**Entes impedidos para realizar aportaciones**

*1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:*

*(...)*

*i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.*

*(...)*

**Artículo 127.**

**Documentación de los egresos**

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*

*3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.*

*(...)"*

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que, de actualizarse una falta sustantiva se presentaría un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial al recibir una aportación en especie de un ente prohibido, se vulneraría sustancialmente los principios de certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

Antes de analizar las normas violadas se debe considerar que la connotación de empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la actividad comercial que desempeña, por lo que, para clarificar esta noción y determinar el carácter mercantil de las empresas, es necesario acudir a una interpretación gramatical y sistemática del concepto de empresa de acuerdo con los ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.

Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que, para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre otras, actividades comerciales.

De acuerdo a las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir que "empresa" se refiere tanto a una persona física como a una moral, pues basta que de conformidad con la normatividad aplicable realice actividades de carácter comercial.

En este sentido, por lo que respecta a los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de los sujetos obligados de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los candidatos independientes, entre ellas, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.

Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.

Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohiba a dichos sujetos realizar aportaciones a los candidatos independientes.

En este sentido, una violación a los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado, transgrediendo el principio de imparcialidad que rige la materia electoral.

Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el influjo de elementos diversos a los democráticos.

Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter mercantil que beneficia económicamente a una candidatura independiente, éste se encontrará influenciado para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el cual fue constituido, haciendo que su actuar sea parcial.

Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una empresa de carácter mercantil a favor de una candidatura independiente, éste se beneficia económicamente mediante un impulso inequitativo que lo coloca en situación ventajosa respecto de los demás institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.

Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la violación del artículo en comento. Tales características son las siguientes:

- Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma.

Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.

- Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en todo caso en beneficios no patrimoniales, aunque sí económicos.

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien material o jurídico.

Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.

- No existe formalidad alguna establecida en el Sistema Jurídico Mexicano.

Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la aportación en relación con lo dispuesto por los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización.

Se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención a los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, mencionados no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante, pues éste puede llevar a cabo la ilicitud incluso en contra de la voluntad del beneficiario, es decir, del candidato independiente.

Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante.



Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas con actividad empresarial, tal como ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente **SUP-RAP-67/2016**.<sup>1</sup>

En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia XV/2015,<sup>2</sup> en la que se colige que **las personas físicas con actividad empresarial** que incurran en alguna infracción en la materia, como realizar aportaciones prohibidas por la ley a favor de un candidato o partido político, pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las personas morales, pues **realizan como actividad sustancial actos de naturaleza empresarial y, por ende, con fines lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales** y las hace susceptibles de ser sancionadas como tales.

Es así que, en términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que las candidaturas independientes hayan realizado durante la campaña objeto del informe.

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados, reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

---

<sup>1</sup> En dicho expediente la sala señaló que “*válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las personas con actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las personas físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones en especie o efectivo a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las agrupaciones u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos por parte de la autoridad administrativa electoral. La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, reciban aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades mercantiles, y por otro, como la prohibición de que las personas físicas con actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a favor de los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como partidos políticos (...) pues son sujetos de interés público en cuanto a los recursos que ejercen o manejan.*”

<sup>2</sup> Tesis: XV/2015, Quinta Época, Jurisprudencia (Electoral) N° 1754, aprobada por la Sala Superior el 25 de marzo de 2015.

Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Por tanto, se tratan de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque los candidatos independientes son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis del concepto denunciado, en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León.

### **Origen del procedimiento**

El quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/190/2021 signado por el C.P. Juan Gilberto Barragán Borghes, Encargado del Despacho de Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite oficio número DJ/CEE/1065/2021, signado por el Lic. Jhonatan Emmanuel Sánchez Garza, Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, por medio del cual remite un escrito de queja presentado por el C. Daniel Galindo Cruz en su carácter de Representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de recursos, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Nuevo León.

En el escrito de queja, se denuncia que en fecha veintidós de mayo del presente año se realizó una publicación en la página del perfil oficial de la red social Facebook del entonces candidato denunciado, en la cual se difundieron imágenes donde se aprecia un negocio denominado Florería Princess, donde en el techo del local se encuentra una antena parabólica color amarilla, que a decir del quejoso es propiedad de dicha persona moral, y en la cual se difunde un mensaje con la frase “SÍGUELE MIGUEL” en letras mayúsculas y en color negro, donde el entonces candidato menciona: “*Me envían foto de una florería en Monterrey. ¿Me hablarán a mi o al Piojo Herrera?*” mismo que a dicho del quejoso benefició a la campaña del entonces candidato independiente, el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, toda

vez que dicha frase fue utilizada como propaganda política del candidato. Los links que presenta como prueba se enlistan a continuación:

1. <https://www.facebook.com/miguelbtrevino>
2. <https://www.facebook.com/miguelbtrevino/photos/a.425846797751194/1444987099170487/>

Asimismo, presenta como prueba dos imágenes, las cuales el quejoso pretende probar que significó un beneficio por parte de una persona moral a la campaña del entonces candidato denunciado, mediante una frase plasmada en una antena parabólica, asimismo adjunta una documental pública consistente en un acta donde se certifica la existencia de la misma, tratándose de todos los elementos probatorios, la imagen derivada del levantamiento de dicha acta se inserta a continuación para pronta referencia:



Es así que con la finalidad de tener certeza y cotejar el contenido de dicho link proporcionado como prueba del quejoso, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se giró una solicitud de certificación, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que certificara el contenido de cada una de las direcciones electrónicas presentadas. En consecuencia, la Dirección requerida presentó el Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/311/2021, que contiene la verificación del contenido de los links aportados como medio de prueba.

Siguiendo la línea de investigación, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno se dictó acuerdo, para solicitar a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este Instituto, a efecto de que por su conducto se requiriera información al

Representante Legal de la Florería Princess, Asesores en regalos S.A., y a su vez informara si la frase “SÍGUELE MIGUEL” la cual se encuentra visible en una antena parabólica instalada en el techo de su establecimiento comercial, correspondía a un mensaje en beneficio de la campaña del entonces candidato.

Posteriormente, en respuesta a la solicitud de información, el Representante Legal de “Asesores en Regalos S.A.” manifestó que dicha frase no corresponde a un mensaje en beneficio de la campaña del C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos.

Posteriormente la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de obtener mayores elementos probatorios respecto de los hechos denunciados, levantó razón y constancia respecto del contenido del link de Facebook, sin embargo, no fue posible visualizar su contenido, tal y como ha quedado asentado.

#### **Valoración de las pruebas.**

Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas.

Como ya fue mencionado anteriormente, las pruebas con las que el quejoso pretende acreditar la conducta presumiblemente imputable al entonces candidato, son las denominadas técnicas, mismas que constan de dos direcciones electrónicas de la red social Facebook, de las cuales el aportante desprende imágenes, aparentemente, relacionadas con el hecho denunciado, una documental pública consistente en una acta de verificación de la existencia de una antena parabólica con el mensaje “SÍGUELE MIGUEL”, y dos imágenes fotográficas, medios probatorios de los que a continuación se hace una relación, con su respectiva descripción:

#### **a) Documental pública:**

- Acta derivada del PES-787/2021 de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el cual la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León da fe de que sobre la Avenida Cuauhtémoc, entre 5 de Mayo y Washington en el Centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se encuentra un local comercial con la leyenda [Floreri@Princess.Com.Mx](mailto:Floreri@Princess.Com.Mx), y sobre la azotea de este se ubica lo que se conoce como antena parabólica, y en la circunferencia de esta se advierte el texto “SIGUELE MIGUEL”.


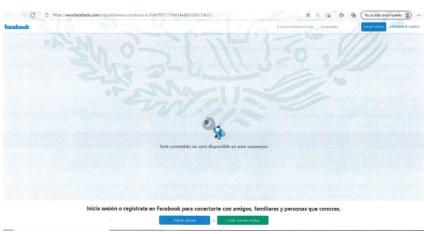
**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

- Consistente en el Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/311/2021, del expediente INE/DS/OE/286/2021, la cual consiste en la verificación del contenido de los links aportados por el quejoso.

Que, al ser documentos expedidos por una autoridad, en pleno ejercicio de sus funciones en términos del artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se consideran como documentales públicas y, por lo tanto, tienen valor probatorio pleno.

**b) Pruebas técnicas:**

**I. Direcciones electrónicas:**

No.	Dirección Electrónica	Elementos que contiene	Descripción contenida en el Acta circunstanciada
1	<a href="https://www.facebook.com/miguelbtrevino">https://www.facebook.com/miguelbtrevino</a>		Se observa una publicación de una imagen consistente en un establecimiento que tiene un letrero "Floreri@ Princess" en la cual en el techo se aprecia una antena parabólica de color amarilla, con la frase "SÍGUELE MIGUEL en letras color negro.
2	<a href="https://www.facebook.com/miguelbtrevino/photos/a.425846797751194/1444987099170487/">https://www.facebook.com/miguelbtrevino/photos/a.425846797751194/1444987099170487/</a>		El contenido no se encuentra disponible.

**II. Imágenes que acompaña y que no cuentan con ninguna dirección electrónica:**

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

NO.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
1		Se aprecia en la imagen una calle, la cual al fondo hay una antena parabólica con la frase “SIGUELE MIGUEL” sobre un establecimiento.
2		Se aprecia en la imagen una antena parabólica con la frase “SIGUELE MIGUEL” sobre un establecimiento.

Es preciso mencionar que, el quejoso se limita a proporcionar las imágenes y en su caso las direcciones electrónicas, sin que se pudiera relacionar directamente con algún concepto de gasto en beneficio del entonces candidato independiente denunciado.

Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores<sup>3</sup> relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.

<sup>3</sup> De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

- Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
- Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía<sup>4</sup>. Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido<sup>5</sup> que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.

---

<sup>4</sup> Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.

<sup>5</sup> A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.



Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

- Tiempo, fechas en que subió la imagen.
- Modo, lo que ahí se observa.
- Lugar, los referidos en la red social.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.

Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.

Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la identidad.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.

Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados con una dirección electrónica, sin embargo, el quejoso pretende acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:

- a. No aparece imagen alguna del entonces candidato denunciado, ni publicidad promotora del voto en favor de su campaña.
- b. No se puede establecer el beneficio y/o la relación directa con la campaña del otrora candidato denunciado.

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general.

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas presuntamente infractoras, éstas deben ser vinculadas directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de poder vincularse con la campaña denunciada.

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado.

No pasa desapercibido para esta autoridad la fe de hechos derivada del PES-787/2021 de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por medio de la cual la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León dio fe de que sobre la Avenida Cuauhtémoc, entre 5 de Mayo y Washington en el Centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se encuentra un local comercial con la leyenda [Floreri@Princess.Com.Mx](mailto:Floreri@Princess.Com.Mx), y sobre la azotea del mismo se ubica una antena parabólica, y en la circunferencia de esta se advierte el texto “SIGUELE MIGUEL”, sin embargo de dicha fe de hechos no se advierten alusivos a ningún tipo de campaña, ni del sujeto denunciado.

Así, del análisis de la totalidad de las documentales que ofrece el quejoso, se limita a mencionar los objetos que se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los conceptos denunciados con la entonces campaña del candidato incoado.

Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó una revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en caso de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia sobre la falta de veracidad de su dicho.

Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas y fotografías tienen el carácter de pruebas técnicas, de las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen o que se denuncian, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se transcribe a continuación:

***“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-***

*De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden*

*confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”*

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo que no dan cuenta de la existencia del concepto denunciado.



Para tal efecto el denunciante ofreció una fe de hechos emitida por la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León, la cual no se controvierte en virtud de tratarse de una documental pública, haciendo prueba plena en cuanto a su contenido, no así por lo que hace a los alcances que el denunciante pretende darle, pues con la misma se advierte la existencia de la antena parabólica con las características descritas en dicha documental, sin embargo con la misma no se cumplen los extremos de la denuncia pues no guarda relación ni vinculación alguna con la campaña del entonces candidato denunciado.

Así pues, se precisa que el quejoso denuncia un presunto beneficio de propaganda política de la campaña del entonces candidato incoado, por una persona moral, toda vez que en el techo de un establecimiento comercial correspondiente a una florería con razón social “Floreri@ Princess”, existe una antena parabólica color amarilla la cual contiene la frase “SÍGUELE MIGUEL” con letras negras, que, a decir del quejoso, dicha frase fue utilizada en beneficio de la campaña del sujeto incoado.

Como consecuencia de lo anterior, es importante señalar que esta autoridad en aras de una correcta función fiscalizadora y con el fin de tener certeza de los hechos denunciados, requirió información al Representante y/o Apoderado Legal de la Florería con razón social “Floreri@ Princess”, a efecto de que informara sobre el presunto beneficio en la campaña del entonces candidato, por la frase “SÍGUELE MIGUEL” plasmada en la antena citada instalada en el techo de la misma, quien en respuesta a la solicitud manifestó que dicha frase no corresponde a un mensaje en beneficio de la campaña del C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos.


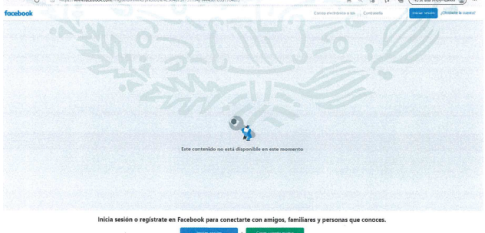
**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

Así pues, esta autoridad no encuentra ningún vínculo, así como el quejoso tampoco aporta alguna prueba que dé indicios de lo denunciado, por lo que las evidencias fotográficas que se presentan a continuación y que son copia idéntica a la presentada por el quejoso en su escrito inicial de queja, se adjuntan como prueba de dicho concepto, mismo que se desglosa a continuación:

Concepto denunciado	Evidencia	Observaciones
Mensaje en beneficio de la campaña del entonces candidato, mismo que se encuentra plasmado en una antena parabólica de un establecimiento comercial.		No se observa vinculación alguna con la que se pueda tener certeza de la vinculación del concepto que se denuncia con la campaña del entonces candidato.
Mensaje en beneficio de la campaña del entonces candidato, mismo que se encuentra plasmado en una antena parabólica de un establecimiento comercial.		No se observa vinculación alguna con la que se pueda tener certeza de la vinculación del concepto que se denuncia con la campaña del entonces candidato.

Aunado a las imágenes anteriormente expuestas, presenta como prueba de los hechos denunciados dos links de la red social Facebook, mismos que se desglosan en el siguiente cuadro:

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

No.	Dirección Electrónica	Elementos que contiene	Observaciones
1	<a href="https://www.facebook.com/miguelbtrvino">https://www.facebook.com/miguelbtrvino</a>		No se observa vinculación alguna con la que se pueda tener certeza de la vinculación del concepto que se denuncia con la campaña del entonces candidato.
2	<a href="https://www.facebook.com/miguelbtrvino/photos/a.425846797751194/1444987099170487/">https://www.facebook.com/miguelbtrvino/photos/a.425846797751194/1444987099170487/</a>		No se puede observar el contenido de dicha dirección electrónica.

Es así que el concepto de gasto denunciado por el quejoso, contemplado en los cuadros que anteceden, no puede ser considerado como un gasto de campaña, ya que no se encuentra vínculo alguno con la promoción a favor del voto del sujeto obligado, ni certeza de que benefician de ningún modo al mismo, aunado a que dicho concepto no se encuentra en la demarcación territorial en la que contiene el entonces candidato independiente denunciado.

Es por ello, que a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en el marco de algún Proceso Electoral, así como la que se haga en el período de campaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.

Al respecto, como se ha venido manifestando la fe de hechos emitida por la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León hace prueba respecto de la existencia del concepto denunciado, así como del lugar en donde se encuentra colocado siendo este un punto a destacar, pues de dicha fe se menciona que se situaron en *Avenida Cuauhtémoc, entre 5 de Mayo y Washington en el centro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León*, no cuenta con alusivos a la campaña denunciada por lo que no se tiene finalidad y no se localiza dentro del área geográfica donde el entonces candidato denunciado contendió por el cargo de Presidente Municipal por lo que no se actualiza el elemento de territorialidad.

Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 32 numeral 2 inciso g) del Reglamento de Fiscalización, se advierte que el entonces candidato denunciado no se pudo beneficiar de la colocación de la antena parabólica, en virtud de que la misma se localiza fuera del área geográfica del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lugar donde contendió el sujeto denunciado y no se hacen referencias donde se pueda vincular el beneficio al denunciado, precepto legal que se cita a continuación:

**Artículo 32.**

**Criterios para la identificación del beneficio**

(...)

**2.** Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios siguientes:

(...)

**g)** Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.

En concordancia con lo anterior, y toda vez que, las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, no se encuentran vinculadas con el sujeto incoado, en virtud de que no se advierte ningún tipo de propaganda, además de que el concepto denunciado se encuentra fuera del área geográfica donde contendió el entonces sujeto denunciado, esta autoridad carece de mayores elementos que le permitan trazar una línea de investigación eficaz, a efecto de allegarse de las documentales pertinentes para esclarecer los hechos presuntamente irregulares.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de que los hechos descritos en el presente apartado hayan formado parte de la campaña del C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, entonces candidato independiente postulado al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; por lo tanto no vulneró lo establecido en los artículos 394, numeral 1, incisos f), sub-inciso vi), en relación con los artículos 401, numeral 1, inciso i), 431, numeral 1 y 446, numeral 1, inciso c) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96, numeral 1, 121, numeral 1, inciso i) y 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **infundado** el apartado objeto de estudio.

**3. Pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas.** Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan en el **fumus boni iuris** —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del **periculum in mora** —temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:

El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares; al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse **por la autoridad competente**, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo INE/CG161/2016<sup>6</sup>, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas

---

<sup>6</sup> Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) estableció que la medida cautelar es una resolución accesorio, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.



cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:

Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.

En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la concatenación de la información obtenida por diversas vías.

Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la presencia de los siguientes elementos:

- La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;
- El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama; y

- La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador especializado en materia de fiscalización.

Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral administrativa.

Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.

Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto que el artículo 16 de la Constitución establece que *“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”*, asimismo el artículo 17 señala que *“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”*; por lo que en el caso específico del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que

el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.

En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en que **no ha lugar a decretar de medidas cautelares** en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, **en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.**

**4. Notificación Electrónica.** Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.

**En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

**RESUELVE**

**PRIMERO.** - Se declara **infundado** el procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del otrora candidato independiente a Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, en los términos del **considerando 2** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** - Notifíquese electrónicamente al quejoso y al entonces candidato independiente a través de su Representante de Finanzas a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.

**TERCERO.-** En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/721/2021/NL**

**CUARTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**